

AcuaJúcar garantiza el Júcar-Vinalopó a pesar de los cambios políticos locales

JAVIER REIGADAS

VALENCIA. Absoluto respeto a las decisiones municipales democráticamente adoptadas y tranquilidad, mucha tranquilidad. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se acogido sin desesperación y paciencia el anuncio de distintas poblaciones de la provincia de Alicante sobre su cambio de postura sobre la conducción Júcar-Vinalopó, modificación de planteamientos generada por los resultados electorales del pasado 27-M.

En este sentido, cabe recordar que diez municipios alicantinos y uno albaceteño, todos ellos gobernados por el PSPV en la pasada legislatura, suscribieron con AcuaJúcar, empresa pública dependiente del departamento que dirige Cristina Narbona encargada de la construcción de dicha transferencia hídrica, un convenio para recibir el líquido elemento cuando los trabajos estén acabados, en principio el año que viene.

Sin embargo, los cambios derivados de las pasadas elecciones municipales, han dibujado un espectro político diferente, lo cual provocará a su vez modificaciones en las posturas de los respectivos gobiernos locales.

La mitad de municipios

De esta forma, cinco de dichos diez localidades alicantinas gobernadas por los socialistas han pasado su vara de mando a los populares, algunos de los cuales ya han advertido de que enmendarán los acuerdos suscritos en su momento con AcuaJúcar para desvincularse de los mismos. Se trata de Villena, Aspe, Elda, Onil, Biar y Bañeres de Mariola, justo el sesenta por ciento del total en la provincia.

Ante esta nueva situación, el Ministerio de Medio Ambiente no ha perdido la calma y aseguraron a ABC que, primero, hay que esperar que todas estas declaraciones se conviertan en hecho constatados y que cada municipio, efectivamente, apruebe en pleno desvincularse de los convenios suscritos en la etapa socialista. Después, según indicaron las fuentes consultadas, se producirá un «profundo respeto» a las decisiones adoptadas.

Eso sí, desde el Ministerio de Medio Ambiente se insistió en que las obras «se van a ejecutar» porque tienen «la financiación garantizada» y no existe ningún impedimento para ello.